

Santiago, veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En autos RIT O-5-2022, RUC 2240042762-0, del Juzgado de Letras y Garantía de Andacollo, caratulados “Vera Molina Javier con Hospital Dr. José Luis Arraño de Andacollo”, por sentencia de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se desestimó la excepción de incompetencia, se hizo lugar a la demanda declarativa de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales, y se rechazó la demanda de cobro de cotizaciones de seguridad social y nulidad del despido.

El demandante dedujo recurso de nulidad y una sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, por resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, lo acogió, anuló parcialmente la sentencia impugnada y, en la de reemplazo, acogió la demanda de nulidad del despido y el pago de las cotizaciones previsionales por todo el período trabajado.

En contra de este último pronunciamiento, las demandadas interpusieron recurso de unificación de jurisprudencia para que esta Corte lo acoja y dicte la sentencia de reemplazo que describe.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando, respecto de la materia de derecho objeto del juicio, existen distintas interpretaciones sostenidas por uno o más fallos firmes emanados de los tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate, sostenida en las diversas resoluciones y que hayan sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia fidedigna de la o de las que se invocan como fundamento.

Segundo: Que las materias de derecho que se solicitan unificar consisten en:

1.- Determinar la obligación del Fisco de enterar las cotizaciones de salud respecto de una persona con la que existió una vinculación en base a honorarios, y que es calificada como relación laboral solo a raíz de la dictación de una sentencia en juicio laboral seguido ante los tribunales de letras del trabajo.

2.- Determinar si es procedente aplicar la nulidad del despido, prevista en el artículo 162 del Código del Trabajo, a la conversión retroactiva de un contrato a honorarios celebrado con un órgano público.



3.- Determinar la procedencia del pago de las cotizaciones previsionales respecto de personas que han prestado servicios para el Estado en base a honorarios, en caso de que sus cotizaciones están pagadas al momento de la dictación de la sentencia que declara la relación como una de carácter laboral.

Tercero: Que, en relación con la segunda materia de derecho, reprochan que no se haya aplicado la doctrina sostenidas en las decisiones que apareja para efectos de su cotejo dictadas por esta Corte en antecedentes Rol N° 37.339-2017, 28.229-2018, 4.440-2019, 15.664-2019, 44.041-2020, 127.253-2020, 31.093-2021 y 45.697-2022, que, en síntesis, sostienen la improcedencia de la sanción de nulidad del despido en casos de relaciones laborales que tienen como fundamento la celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, puesto que concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la punición de la nulidad del despido, esto es, que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

En cuanto a la primera materia, ofrecieron la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de Santiago en Rol N° 2.530-2018, que acogió el recurso de nulidad deducido por el Fisco de Chile por el motivo del artículo 477 del Código del Trabajo, en lo que se refiere al pago de las cotizaciones de salud, puesto que para el demandante no existe un beneficio inmediato o futuro que pueda hacer valer con esos pagos, dado que las prestaciones de salud no existieron en su momento, por lo que se infringen los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y el artículo 2 de la Ley 19.880, si se obliga al demandado a pagar de forma retroactiva este tipo de cotizaciones, ya que el órgano público no puede ser obligado a imponer los aportes asistenciales de salud a una entidad privada (ISAPRE) que no ha sido parte en el juicio y que será la única beneficiaria con dichos estipendios, ya que el demandante no recibirá prestaciones con cargo a dichos aportes al no mediar un contrato de salud que opere en forma retroactiva.

Y, en relación con la tercera materia de derecho, acompañaron las decisiones de esta Corte en antecedentes Rol N° 30.717-2020 y 1.597-2020, y de la Corte de Apelaciones de Temuco en Rol N° 398-2018, en que las dos primeras se refieren a la naturaleza jurídica del vínculo que unía a las partes, y la última, declara la improcedencia de la condena al pago de cotizaciones previsionales, por aplicación del principio de legalidad, a la luz de lo prescrito en el artículo 100 de la Constitución Política de la República y en el artículo 4 del Decreto Ley N° 1263, puesto que la vinculación entre el demandante con el Fisco de Chile se verificó por



diversos contratos de prestación de servicios a honorarios, los que gozaban de presunción de legalidad, por lo que no se encuentran típicamente en las hipótesis de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios, la existencia de una relación laboral, y que, en tales condiciones, desde que el demandante inició su relación laboral con el demandado, el Fisco estaba impedido de efectuar cotizaciones y sólo procedería desde que la sentencia reconoce la prestación de servicios al amparo del Código del Trabajo, no pudiendo imponerse dicha carga con efecto retroactivo lo que conllevaría, además, una sanción desproporcionada que grava al ente público

Cuarto: Que la sentencia impugnada acogió el recurso de nulidad promovido por la parte demandante, sobre la base del motivo previsto en el artículo 477, en relación con los artículos 58 y 162 del Código del Trabajo, 17 del Decreto Ley N° 3.500, y sostuvo que corresponde acceder a la sanción de nulidad del despido y a las demás prestaciones derivadas de la relación laboral, puesto que se determinó que la convención que unió a las partes era de tipo laboral, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 7° del Código del Trabajo, cualidad que no ha nacido con la sentencia que la declaró, sino que viene dada por la naturaleza de los servicios.

Cita sentencias de esta Corte, entre ellas, las dictadas en causas Rol N° 99-2018 y 318-2018, que declaran la procedencia de la sanción de nulidad del despido al no haberse pagado las cotizaciones previsionales en el tiempo intermedio.

Por tanto, reconocida la existencia de una relación laboral, y resultando la sentencia de carácter declarativa, resulta forzoso concluir la obligación que tiene el empleador de pagar las cotizaciones de seguridad social del trabajador durante el período, dado que no fueron solucionadas durante el período

Expone los fines de la inclusión del inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo por la Ley 19.631, y que su operatividad no distingue en relación con quien sea empleador, diferenciación que, además, no correspondería realizar atendiendo al principio de igualdad ante la ley que impera en el sistema normativo, y por consiguiente, toda persona de derecho privado o público, que tenga la calidad de empleador, está sujeto a la nulidad del despido en caso de concurrir los presupuestos fácticos. Añade, que, si bien es efectivo que se ha sostenido la improcedencia de su aplicación con relación a los organismos públicos, quienes, según afirman, por aplicación del principio de legalidad presupuestaria no están en la posibilidad de convalidar el despido y, por tanto, se les eximiría de los efectos de la institución en comento, no es menos cierto que la aplicación material, efectiva y real del principio de legalidad por parte de todos los órganos del Estado



debería implicar que no realicen acciones que precaricen las relaciones labores contratando por vía del arrendamiento de servicios personales u honorarios a personas con las cuales, en realidad, mantienen una relación laboral de aquellas reguladas por el Código del Trabajo y que implican, por tanto, la necesidad y obligatoriedad de dar cumplimiento a las leyes laborales y no dejar entregado al trabajador al cumplimiento de sus obligaciones sin obtener los beneficios propios e inherentes del ámbito protector del derecho laboral, entre ellos, el salvaguardar sus intereses y necesidades de seguridad social en los ámbitos de la salud, vejez y eventual cesantía.

Agrega que su procedencia se vincula a un aspecto interpretativo, por lo que deben considerarse los principios de protección y pro operario, por lo cual, al haber declarado la existencia de una relación laboral, que se extendió por más de dos años y el carácter declarativo de la sentencia que constata el vínculo, y al haberse establecido la falta de pago de las cotizaciones de previsión social del trabajador por todo el período laboral, se estima que debió acogerse la solicitud de nulidad del despido.

Quinto: Que, en consecuencia, al cotejar lo resuelto en las sentencias invocadas por el recurrente con lo decidido en la que ahora se impugna, es posible concluir que concurre el presupuesto establecido en el artículo 483 del Código del Trabajo para unificar la jurisprudencia sobre la materia de derecho propuesta, esto es, la existencia de interpretaciones diversas en relación a una cuestión jurídica proveniente de tribunales superiores de justicia, razón por la que corresponde determinar cuál postura debe prevalecer y ser considerada correcta.

Sexto: Que, en lo que concierne a la procedencia de la sanción de nulidad del despido, las sentencias reseñadas en el recurso dan cuenta que, en algún momento, existieron distintas interpretaciones respecto de la materia indicada, las que ya se encuentra unificada por esta Corte, a partir de la sentencia dictada en la causa Rol N°41.500-2017, sosteniéndose sin variación que tratándose de relaciones laborales que tienen como fundamento la celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la punición de invalidación del despido, esto es, que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

Además, se ha considerado que la aplicación -en estos casos- de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza,



por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.

Séptimo: Que, en estas condiciones, yerra la sentencia impugnada al concluir que, en el caso de autos, es aplicable la sanción de la nulidad del despido, por lo que, conforme a lo razonado, y habiéndose determinado la interpretación acertada respecto de la materia de derecho objeto del juicio, el presente recurso en este extremo deberá ser acogido.

Octavo: Que, en cuanto a la primera y tercera materia de derecho, se debe tener presente que esta Corte ha sostenido invariablemente que en materia de cotizaciones de seguridad social rige el reconocimiento de la obligación contenida en el artículo 58 del Código del Trabajo, que impone al empleador deducir de las remuneraciones de los trabajadores *“las cotizaciones de seguridad social,* tratándose de un descuento de carácter de obligatorio que las afecta, cuya naturaleza imponible es determinada por ley, lo que hace inexcusable su cumplimiento, como lo refuerzan y precisan los artículos 17 y 19 del Decreto Ley N°3.500, que establecen la obligatoriedad del sistema para los afiliados menores de sesenta y cinco años de edad si son hombres y menores de sesenta años si son mujeres, y señalan que es el empleador quien debe declarar y pagar las cotizaciones en los organismos pertinentes dentro de las fechas indicadas.

Además, para sostener la vigencia de la obligación, sin perjuicio de que la relación, en su origen, no haya sido reconocida como laboral por las partes, se ha acudido a la presunción contenida en el artículo 3° inciso segundo de la Ley N° 17.322, atendidos los argumentos previos y el carácter declarativo que tiene la sentencia laboral, que esta Corte ha reconocido invariablemente, como se advierte en las decisiones de que tratan los antecedentes Roles N° 6.604-2014, 9.690-2015, 40.560-2016, 76.274-2016 y 3.618-2017, entre otras.

Por otra parte, se ha dicho también que los razonamientos precedentes son comprensivos tanto de las cotizaciones previsionales como de salud, atendido el tenor literal del citado artículo 58 del código del ramo, que al establecer la ya referida obligación alude a las *“cotizaciones de seguridad social,* misma formulación amplia que utilizan los artículos 1 y 3 de la Ley N°17.322; y que, por lo demás, corresponde a la judicatura dar eficacia a los derechos consagrados en el artículo 19 N°9 y 18 de la Constitución Política, que obliga al Estado a través de todos sus Poderes, a garantizar el acceso de todos los habitantes a las



prestaciones de salud y seguridad social, lo que dada la configuración que la legislación ha hecho del sistema, supone velar por el oportuno cumplimiento de la obligación de aportar a financiar los sistemas que las administran, sea de manera directa para los trabajadores independientes o a través de la retención del empleador para los dependientes.

Se debe agregar que lo anterior resulta aplicable también a las cotizaciones que financian el seguro de cesantía consagrado por la Ley N°19.728, pues corresponde igualmente a uno establecido en forma obligatoria en favor de los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, de modo que el inicio de la relación laboral de un trabajador no sujeto al seguro generará su incorporación automática a éste y la obligación de cotizar en los términos establecidos en el artículo 5° de la misma ley y, en caso de incumplimiento, el artículo 11 de la ley prevé un sistema de cobro y sanciones similar al del DL N° 3.500, haciéndole aplicable numerosas normas de la Ley N°17.322, que regula la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social. De manera que por los fines que satisface este seguro, el carácter obligatorio y universal con que se ha impuesto, y por la técnica de pago y cobro de las cotizaciones que contribuyen a financiarlos, no cabe sino concluir que se trata de una prestación de seguridad social a efectos de lo previsto en el artículo 58 del Código del Trabajo, por lo que, en principio, y sin perjuicio de lo que se precisará más adelante, si la obligación no fue cumplida durante la vigencia del contrato, deberá serlo con posterioridad.

Por consiguiente, acreditado que el empleador no cumplió con su obligación previsional durante la vigencia del vínculo, la condena debe incluir la de entero de las previsionales propiamente tal, como las de cesantía y salud.

Noveno: Que, por otra parte, y sin perjuicio que la legislación impone al empleador el entero de las cotizaciones de seguridad social, previo descuento al trabajador, asignándole el rol de agente retenedor, lo cierto es que cuando el trabajador paga directamente sus cotizaciones en las instituciones pertinentes, sea porque así lo ha decidido en forma voluntaria o porque lo ha acordado con su empleador, incorporando una cláusula en tal sentido en el contrato a honorarios mediante el cual se formalizó la contratación en su origen, se trata de una conducta a la que debe darse valor, pues beneficia su situación previsional, permitiéndole acceder a prestaciones de salud y/o cesantía, e incrementar los fondos con que financiará su futura pensión.

En ambos casos, esto es, pago voluntario de las cotizaciones por parte del trabajador o existencia de una cláusula en el contrato que así lo disponga, este tribunal se ha pronunciado previamente reconociendo los efectos jurídicos de tales



acciones, al entender que por su intermedio se cumple la finalidad perseguida por la norma, en cuanto a que el trabajador pueda acceder efectivamente a las prestaciones que le garantiza la Constitución Política de la República en su artículo 19 N°18.

En efecto, tratándose del primero, a partir de la sentencia dictada en causa rol N° 35.653-2021, seguida de las emitidas en los ingresos N° 41.026-2021, 98.552- 2022 y 106.732-2023, entre otras, se ha sostenido sin variación la improcedencia de condenar al pago de las cotizaciones previsionales, de cesantía y salud, cuando el trabajador las ha enterado directamente ante los organismos respectivos. Para ello se ha considerado que el objetivo perseguido a través de la obligación consagrada en el artículo 58 del Código del Trabajo, también puede ser alcanzado cuando es el trabajador quien paga directamente sus cotizaciones de seguridad social ante los organismos administradores, evitando la existencia de las denominadas “lagunas” en su cuenta de capitalización individual y habilitándolo para acceder a los beneficios que financian, por lo que no hay un daño previsional que reparar, lo que torna en improcedente ordenar un doble pago de la prestación que se trata, de manera que sólo procedería la condena cuando las referidas cotizaciones no hayan sido previamente enteradas y sólo en la parte que se adeude.

En el segundo caso, esto es, cuando el trabajador asumió el entero directo del pago mediante una cláusula incorporada en el contrato de honorarios respectivo, sea que haya cumplido con la obligación o no, se ha decidido lo mismo, lo que aparece como una consecuencia de lo razonado a propósito de la aplicación de la sanción de la nulidad del despido a este tipo de casos, dado el origen de la contratación y la presunción de legalidad que lo amparó, lo que permite dar valor también a este tipo de cláusulas que no serían procedentes en un contrato de trabajo ordinario, nacido a partir del acuerdo de voluntades de las partes que aceptan obligarse en los términos descritos en el artículo 7° del Código del Trabajo. En la sentencia dictada en causa rol N°98.552-2022, se declaró que, si el actor se obligó a enterar directamente las cotizaciones en los organismos pertinentes, cualquier deuda que pueda existir y perjuicios que de ello se deriven serán consecuencia de su propio incumplimiento, por lo que no hay un daño previsional que pueda ser imputado al demandado, lo que torna en improcedente la condena a solucionarlos.

Esta última hipótesis con la sola excepción de las cotizaciones destinadas a financiar el seguro de cesantía establecido por la Ley N°19.728, pues el pacto cuyos efectos jurídicos se reconocen, supone que el trabajador, formalmente denominado prestador de servicios durante la vigencia del vínculo, debió asumir



directamente el pago de sus cotizaciones de seguridad social en conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 20.255, que, sin perjuicio de su entrada en vigencia diferida en este punto, modificó el Decreto Ley N°3.500, de 1980, entre otros cuerpos legales, e hizo obligatorio para los independientes el pago de una serie de cotizaciones de seguridad social, en particular, las destinadas a financiar los sistemas previsionales, de salud común (Isapre y Fonasa) y de salud profesional, pero, no consideró las del seguro de cesantía; las que, en consecuencia, nunca se entendieron incorporadas en los pactos de esta naturaleza, por lo que, una vez esclarecida la naturaleza del contrato, deben ser solucionadas por el empleador en los términos que más adelante se indicará.

Décimo: Que, en conformidad a lo expuesto, es posible asentar que la regla en materia de cotizaciones de seguridad social, esto es, previsionales, de cesantía y de salud, es la vigencia de la obligación de pago por parte del empleador, salvo que, tratándose de contrataciones originadas en un contrato de prestación de servicios suscrito con un órgano de la Administración del Estado, amparado en su origen por la presunción de legalidad y en que el prestador de servicios tuvo durante su vigencia la apariencia de trabajador independiente, las partes hayan hecho de su cargo el cumplimiento de la obligación o, sin tal pacto, que éste las haya enterado directamente, sea en forma total o parcial.

En consecuencia, de no existir dicha cláusula en el respectivo contrato de prestación de servicios y siempre que el pago de tales prestaciones no sea totalmente solucionadas por el trabajador, deberán cumplirse por el empleador, lo que conduce a otra arista del problema, referida a las sanciones que el artículo 19 del Decreto Ley N°3.500 y las Leyes N°17.322 y 19.728 imponen al empleador que paga fuera del plazo que la normativa prescribe, pues de acuerdo a los incisos séptimo, décimo y undécimo del artículo 19 del Decreto Ley N°3.500, a los artículos 21 y 22 letra a) de la Ley N°17.322 y, artículo 11 de la Ley N° 19.728, la falta de declaración y pago oportuno de las cotizaciones previsionales queda sujeta a una multa a beneficio fiscal, además de incrementarse su monto con los reajustes e interés penal correspondiente.

Sin embargo, como a propósito de la aplicación a este tipo de casos de la institución consagrada en el inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo se ha reconocido que los órganos de la Administración del Estado no podían, de acuerdo con la normativa y las reglas presupuestarias que los rigen, pagar libremente las cotizaciones de sus prestadores de servicios a honorarios durante la vigencia del vínculo, requiriendo para convalidar el despido, una vez calificada tal relación como laboral, de un pronunciamiento judicial condenatorio, estando, en definitiva, de buena fe y amparados por la antes mencionada presunción de



legalidad, debe concluirse que no puede tenérseles como deudor en mora o incumplidor para estos efectos, puesto que resultaría contradictorio no sancionarlos con la declaración de nulidad del despido, para luego imponerles multas e intereses penales.

Lo anterior, conduce a que las cotizaciones a que resulte condenado este tipo de empleador deberán ser incrementadas con reajustes, calculados desde la oportunidad que indican el inciso décimo del artículo 19 del Decreto Ley N°3.500, el inciso tercero del artículo 22 de la Ley N°17.322 y el inciso primero del artículo 11 de la Ley N° 19.728, más los intereses que se devengarán desde la época en que el fallo que declaró el carácter laboral del vínculo quede ejecutoriado y sobre una base diversa a la establecida en el Decreto Ley N°3.500 y en las Leyes N°17.322 y 19.728, ya que, considerando lo dicho, se descarta la aplicación de intereses penales, de manera que deberán determinarse en conformidad a lo previsto en el inciso tercero del artículo 63 del Código del Trabajo.

Además, a fin de mantener la debida concordancia con los razonamientos expuestos acerca del origen del contrato celebrado entre las partes, el cobro de dichas cotizaciones deberá excluir las multas a que aluden los artículos 19 inciso séptimo del Decreto Ley N°3.500, 22 letra a) de la Ley 17.322 y 10 inciso sexto de la Ley N° 19.728.

Undécimo: Que, por último, en materia de cotizaciones de seguro de cesantía debe efectuarse una prevención adicional, dado que su financiamiento, a diferencia de lo que ocurre en cuanto a previsión y salud, es tripartito, conformándose por aportes del trabajador, del empleador y del Estado. Tratándose de dependientes con contrato de trabajo indefinido, como ocurre en el caso, la contribución al seguro, según lo prevé el artículo 5 de la Ley N° 19.728, se divide en un 0,6% de las remuneraciones imponibles de cargo del trabajador, un 2,4% de las remuneraciones imponibles de cargo del empleador y un aporte del Estado que corresponde a un monto global que se entera anualmente.

Entonces, sobre la base de lo dicho, en el caso del trabajador que no registra pago de estas cotizaciones durante la vigencia del contrato, sea efectuado por él o por su empleador, se declarará que éste debe solucionarlas, incluyendo tanto el porcentaje que es de su cargo como aquel que debió descontar oportunamente de la remuneración del trabajador, dado que la legislación obliga que ambas fracciones de la cotización sean solucionadas durante la vigencia de la relación laboral, lo que en la especie no fue cumplido. Por otra parte, de ordenarse el cumplimiento parcial de la obligación, limitado únicamente al porcentaje financiado por el empleador, se estarían perjudicando las futuras prestaciones a las que el trabajador pueda acceder con cargo a estos pagos, razonamientos que



conducen a modificar lo que, en el último tiempo se había decidido a este respecto.

Duodécimo: Que los razonamientos previos deben ser contrastados con los hechos asentados por la sentencia impugnada y los antecedentes allegados por las partes, de los que se desprende que la relación laboral entre las partes se desarrolló entre el 1 de junio de 2020 al 30 de junio de 2022, siendo formalizada a través de una sucesión de contratos de prestación de servicios a honorarios, constando que en todos se incorporó una cláusula que hacía de cargo exclusivo del demandante el pago de sus cotizaciones previsionales, así como las de salud común y profesional, obligación que la parte cumplió íntegramente.

Décimo tercero: Que, por consiguiente, estando cubierta la totalidad del período servido por la referida cláusula, procede desestimar el pago de las cotizaciones previsionales y de salud, dada la obligación asumida por el demandante y disponer el entero de las correspondientes a seguro de cesantía, equivalente al 3% de la remuneración imponible.

Y, por último, en cuanto al pago de los reajustes, intereses y multas, se dispondrá la solución de los dos primeros conceptos y el rechazo de la imposición de multas, de acuerdo a los fundamentos previamente expuestos.

Décimo cuarto: Que, en tal circunstancia, yerra la Corte de Apelaciones de La Serena cuando al dictar el pronunciamiento de reemplazo ordena pagar la totalidad de las cotizaciones de seguridad social devengadas durante toda la vigencia de la relación laboral. En efecto, sobre la premisa de lo que se ha venido razonando, la referida sentencia, dictada tras acogerse el recurso de nulidad planteado, debió limitarse a condenar a enterar aquellas que corresponden al seguro de cesantía.

Décimo quinto: Que, por las consideraciones antes dichas, no cabe sino acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por los demandados en lo que concierne a la aplicación de la sanción de nulidad del despido y en cuanto al cobro de cotizaciones previsionales y de salud abarcado en su integridad por la cláusula mencionada, invalidando el fallo impugnado y procediendo a dictar acto seguido y en forma separada, la correspondiente sentencia de reemplazo.

Por lo reflexionado, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se acoge** el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por los demandados, Servicio de Salud de Coquimbo y Hospital Dr. José Luis Arraño de Andacollo, respecto de la sentencia de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, la que **se invalida** en lo concerniente a la decisión de acoger el recurso de nulidad deducido por el demandante en lo relativo a la sanción de



nulidad del despido y pago de cotizaciones de seguridad social y, en su lugar, se declara que se rechaza la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, en lo que dice relación con la sanción de nulidad del despido, y se acoge por el motivo de infracción de ley, únicamente en lo que dice relación con el pago de las cotizaciones del seguro de cesantía, debiendo dictarse acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente la respectiva de reemplazo.

Se previene por la ministra **señora Chevesich** y la abogada integrante **señora Rojas**, que si bien tienen una postura diferente respecto de la segunda materia de derecho cuya unificación se solicita, en los términos señalados en los votos estampados en sentencias dictadas en causas que se refieren a la misma cuestión, declinan incorporarla, teniendo únicamente en consideración que ya se encuentra uniformada por esta Corte, como se expresó, sin que se hayan dado a conocer nuevos argumentos que autoricen su variación.

Notando que en la tramitación de esta causa no se han observado todas las formalidades legales, sin que ello cause nulidad, este tribunal dispone, en ejercicio de sus facultades económicas y conservativas, que la Corte de Apelaciones de La Serena y el tribunal de instancia deberán observar y hacer cumplir estrictamente a las partes, sus abogados patrocinantes y mandatarios judiciales, la exigencia prevista en el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la obligación de fijar domicilio conocido dentro de los límites urbanos del lugar en que funcione el juzgado.

Regístrese.

Rol N° 217.898-2023.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., Adelita Ravanales A., y las Abogadas Integrantes señoras Leonor Etcheberry C. e Irene Rojas M. No firma la ministra señora Ravanales, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal. Santiago, veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro.

GLORIA ANA CHEVESICH RUIZ
MINISTRA
Fecha: 28/10/2024 15:08:04

ANDREA MARIA MERCEDES MUÑOZ
SANCHEZ
MINISTRA
Fecha: 28/10/2024 15:08:05



| | |
|---|--|
| ROSA MARIA LEONOR ETCHEBERRY COURT ABOGADO INTEGRANTE Fecha: 28/10/2024 15:08:06 | IRENE EUGENIA ROJAS MIÑO ABOGADO INTEGRANTE Fecha: 28/10/2024 15:08:07 |
|---|--|



En Santiago, a veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483-C del Código del Trabajo, se dicta la sentencia de reemplazo que sigue en unificación de jurisprudencia.

Vistos:

Se reproduce la sentencia del grado, con excepción del numeral cuarto del motivo undécimo, y los razonamientos vigésimo primero, vigésimo tercero y vigésimo cuarto, que se eliminan. Además, se transcribe el motivo tercero de la sentencia de reemplazo dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena.

Asimismo, se dan por reproducidos los razonamientos sexto y octavo al décimo tercero de la sentencia de unificación de jurisprudencia que antecede.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que son hechos acreditados que el demandante prestó servicios que se desarrollaron bajo subordinación y dependencia, en los términos descritos en el artículo 7° del Código del Trabajo, los que se iniciaron el 1 de junio de 2020 y concluyeron el 30 de junio de 2022, cuando fue despedido sin cumplimiento de las formalidades previstas por el artículo 162 del Código del Trabajo.

Segundo: Que el trabajador se obligó a pagar directamente sus cotizaciones previsionales y de salud durante todo el período servido, por lo que procede desestimar la demanda que persigue su solución; también la demanda de nulidad del despido. Sin embargo, corresponde disponer el entero de las cotizaciones correspondientes al seguro de cesantía, equivalentes al 3% de la remuneración imponible.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 63, 67, 162, 168, 172, 173, 446 y siguientes del Código del Trabajo, **se declara que:**

I.- Se **RECHAZA** la excepción de incompetencia absoluta opuesta por las demandadas.

II.- Se **ACOGUE** la demanda deducida por don **JAVIER ABRAHAM VERA MOLINA** en contra del **HOSPITAL DR. JOSÉ LUIS ARRAÑO DE ANDACOLLO** y del **SERVICIO DE SALUD COQUIMBO**, declarándose que se verificó una relación laboral y continua, que se extendió desde el 1 de junio de 2020 al 30 de junio de 2022, y que el despido de que fue objeto es injustificado, por lo que se los condena al pago de las siguientes prestaciones:

- a) Indemnización sustitutiva del aviso previo por la suma de \$ 1.770.716.-
- b) Indemnización por años de servicios por un monto de \$3.541.432.-
- c) Recargo del 50%, según lo dispuesto en la letra b) del artículo 168 del Código del Trabajo, por \$1.770.716
- d) Feriado legal y proporcional por \$1.770.716



e) Cotizaciones de cesantía devengadas durante el tiempo que se extendió la relación laboral por el 3% de la remuneración imponible, desestimándose en lo demás.

III.- Se RECHAZA la demanda en cuanto a la aplicación de la sanción de nulidad del despido.

IV.- Las sumas referidas y condenadas a pagar en las letras a) a d) lo serán debidamente reajustadas y con los intereses previstos en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

V.- Las cotizaciones ordenadas pagar en la letra e) devengarán los reajustes que ordena el artículo 11 de la Ley N° 19.728, calculados desde la época y en los términos que indican, e intereses calculados conforme lo dispone el artículo 63 del Código del Trabajo, y únicamente desde la época en que esta sentencia quede ejecutoriada, sin considerar la aplicación de multas.

VI.- Cada parte pagará sus costas.

Regístrese y devuélvase.

N° 217.898-2023.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., Adelita Ravanales A., y las Abogadas Integrantes señoras Leonor Etcheberry C. e Irene Rojas M. No firma la ministra señora Ravanales, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal. Santiago, veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro.

GLORIA ANA CHEVESICH RUIZ
MINISTRA

Fecha: 28/10/2024 15:08:11

ANDREA MARIA MERCEDES MUÑOZ
SANCHEZ

MINISTRA

Fecha: 28/10/2024 15:08:12

ROSA MARIA LEONOR ETCHEBERRY
COURT

ABOGADO INTEGRANTE

Fecha: 28/10/2024 15:08:13

IRENE EUGENIA ROJAS MIÑO
ABOGADO INTEGRANTE

Fecha: 28/10/2024 15:08:14



En Santiago, a veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

